



RESEÑA LEGISLATIVA

ISSN 0717-0416

Nº 1356

31 de Octubre de 2018

AULA SEGURA

BOLETÍN 12107-04

RESEÑA LEGISLATIVA es una publicación de
LIBERTAD Y DESARROLLO
DIRECTOR RESPONSABLE: Luis Larraín A.
EDITOR: Pablo Kangiser G.
DIRECCIÓN: Alcántara 498, Las Condes, Santiago,
Chile.

 **Fundación
Hanns
Seidel**

RESEÑA LEGISLATIVA

Nº 1356

31 DE OCTUBRE DE 2018

ÍNDICE

AULA SEGURA

BOLETÍN 12107-04

OPINIÓN EJECUTIVA	4
CONTENIDO DEL PROYECTO DE LEY	5
COMENTARIOS DE MÉRITO	7
TEXTO DEL PROYECTO DE LEY.....	18
ANEXO	20


AULA SEGURA

DESCRIPCIÓN BOLETÍN 12107-04

REFERENCIA	Fortalece las facultades de los directores de establecimientos educacionales en materia de expulsión y cancelación de matrícula en los casos de violencia que indica. Texto aprobado en primer trámite constitucional
INICIATIVA	Mensaje presidencial
ORIGEN	Senado
MINISTERIO	De Educación
INGRESO	20 de septiembre de 2018
ARTICULADO	Dos artículos permanentes y un artículo transitorio

OPINIÓN EJECUTIVA DE LYD

Tras una ardua discusión en el Senado sobre el contenido del proyecto de ley conocido como “Aula Segura”, fue aprobado un texto que recoge la idea matriz del proyecto presentado por el Ejecutivo: devolver autoridad a los directores frente a hechos de violencia que han ido en incremento en los establecimientos educacionales públicos en el último tiempo. Estas conductas, además de requerir sanciones oportunas y eficaces, deben motivar la posibilidad de separar al alumno agresor de la comunidad educativa.

Siendo adecuado que se establezcan a nivel legal las conductas consideradas como gravemente atentatorias a la convivencia escolar, que por su comisión deba iniciarse un procedimiento sancionatorio y que permitan la aplicación de la medida cautelar de suspensión, la reducción de los plazos acordada en el Senado no parece suficiente. La propuesta del Ejecutivo parecía ser, en este sentido más adecuada, puesto que, respetando sustancialmente los elementos constitutivos del debido proceso, aseguraba al alumno acusado de mejor manera su derecho a ser educado 

CONTENIDO DEL **PROYECTO DE LEY**

El proyecto de ley aprobado por el Senado en su primer trámite constitucional hace alternativos los requisitos por los cuáles pueden ser aplicables las medidas de expulsión y cancelación de matrícula, los cuáles hoy deben concurrir conjuntamente. Así, podrán aplicarse estas medidas cuando la causal que las motiva esté claramente descrita en el reglamento interno del establecimiento, o bien, afecte gravemente la convivencia escolar conforme a lo dispuesto por la misma ley.

En este sentido, se establece que afectan gravemente la convivencia escolar los actos cometidos por cualquier miembro de la comunidad educativa¹ de un establecimiento educacional, que causen daño a la integridad física o síquica de cualquiera de sus miembros o de terceros que se encuentren en las dependencias de los establecimientos, tales como agresiones de carácter sexual, agresiones físicas que produzcan lesiones, uso, porte, posesión y tenencia de armas o artefactos incendiarios, así como también los actos que atenten contra la infraestructura esencial para la prestación del servicio educativo por parte del establecimiento.

En los casos en que el alumno cometa una de las conductas señaladas en la ley u otras consideradas graves o gravísimas por el reglamento interno de su establecimiento, el director debe iniciar un procedimiento sancionatorio. A su vez, cuando la falta grave o gravísima descrita en el reglamento interno se sancione con la expulsión o cancelación de matrícula o sea de las conductas consideradas como gravemente atentatorias a la convivencia escolar según la ley, el director podrá decretar la medida cautelar de suspensión al alumno mientras dure el procedimiento sancionatorio. Esta medida no se puede considerar como sanción si el procedimiento deriva en una sanción más gravosa que ella, como lo es la expulsión o cancelación de matrícula.

El director debe notificar por escrito la decisión de suspender al alumno, junto a sus fundamentos, a aquél y a sus padres o apoderados, según corresponda. Cuando la decree tendrá un plazo máximo de diez días hábiles contados desde la notificación para resolver el procedimiento sancionatorio. Este debe respetar los principios del debido proceso, tales como la presunción de inocencia, bilateralidad, derecho a presentar pruebas, entre otros. Contra la resolución sancionatoria, el alumno, sus padres o apoderados, podrán pedir ante el director la reconsideración, en un plazo de cinco días desde la notificación, quien resolverá previa consulta al Consejo de Profesores, el cual deberá pronunciarse por escrito. La interposición de la reconsideración ampliará el plazo de suspensión del alumno hasta culminar su tramitación.

¹ La comunidad escolar está integrada por alumnos, padres, apoderados, profesionales de la educación, asistentes de la educación, equipos docentes directivos y sostenedores educacionales (Artículo 9 del DFL N°2 de 2009, del Ministerio de Educación, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N°20.370 con las normas no derogadas del DFL N°1, de 2005, conocido como Ley General de Educación).

En los casos de expulsión o cancelación de matrícula, el Ministerio de Educación, a través de la Secretaría Regional Ministerial respectiva, deberá velar por la reubicación del estudiante en establecimientos que cuenten con profesionales que presten apoyo psicosocial y adoptar las medidas para su adecuada inserción en la comunidad escolar. A su vez, deberá informar de la expulsión a la Defensoría de los Derechos de la Niñez, si se trata de menores de edad.

Estas normas aplicarán a todos los establecimientos educacionales (públicos, particulares subvencionados y particulares), los cuales deberán adecuar sus reglamentos internos dentro de 90 días contados desde la publicación de la ley ■■■■

IV. COMENTARIOS DE MÉRITO

El proyecto de ley presentado por el Ejecutivo surgió como reacción a la situación de violencia que ha escalado en el último tiempo en los establecimientos educacionales públicos y a la falta de poder de reacción por parte de sus directores. Lo último se debe a que mediante la Ley de Subvenciones, que sólo es aplicable a los establecimientos educacionales que reciben fondos del Estado, esto es, públicos y particulares subvencionados, se estableció una serie de requisitos previos que deben ser cumplidos por parte de la directiva para poder aplicar las medidas de expulsión y de cancelación de matrícula, las cuales no se exigen a los colegios privados.

Las restricciones para la imposición de las máximas sanciones del ordenamiento escolar hacen que el actual procedimiento no sea atingente a las situaciones especialmente graves, tanto por su larga extensión como por no contemplar medidas para evitar la interacción entre el estudiante agresor y la víctima de los hechos de violencia. Asimismo, las restricciones han devenido en la práctica en una pérdida de la autoridad del director, quien se encuentra amenazado por la posibilidad de que la Superintendencia de Educación lo sancione en aquellos casos en que considere que la aplicación de la expulsión no se deduce directamente del reglamento interno, e incluso que los Tribunales de Justicia reviertan la expulsión ante la presentación de recursos por parte del alumno.

NORMAS PARA EL ESTABLECIMIENTO DE SANCIONES

Para que se otorgue la subvención escolar es necesario que los establecimientos cuenten con un reglamento interno, en el cual se establezcan las normas de convivencia escolar y las sanciones aparejadas a su infracción, las cuales deben respetar los principios de proporcionalidad y no discriminación y adecuarse a las normas legales. También se tienen que establecer los procedimientos para determinar las conductas y las instancias de revisión. Este reglamento se informa y se entrega a los apoderados al momento de matricular al alumno y, si es modificado, en la renovación de la matrícula.

En los casos de expulsión y cancelación de matrícula las causales tienen que estar claramente descritas en el reglamento interno del colegio y deben afectar gravemente la convivencia escolar. No obstante, no se pueden aplicar estas medidas por motivos académicos, de carácter político, ideológicos o de cualquier otra índole.

Por regla general, el director debe haber representado previamente al padre, madre o apoderado del estudiante al que se va a expulsar y cancelar la matrícula sobre la inconveniencia de las conductas del alumno y haberles advertido la posible aplicación de estas sanciones. Junto con lo anterior, debe haber implementado a favor del niño o adolescente medidas de apoyo pedagógico o psicosocial, de acuerdo con lo establecido en el reglamento interno del propio establecimiento. Sin

embargo, y sin perjuicio de haber cumplido con los requisitos antes descritos, no puede expulsar o cancelar la matrícula a un estudiante en un periodo del año escolar que haga imposible que sea matriculado en otro establecimiento.

Sin perjuicio de lo anterior, si la conducta del alumno atenta en forma directa contra la integridad física o psicológica de alguno de los miembros de la comunidad escolar, no son aplicables dichas restricciones. En estos casos la ley exige que se aplique un procedimiento previo, racional y justo establecido en el reglamento interno del establecimiento, que garantice el derecho del estudiante o de su apoderado de realizar descargos y a solicitar la reconsideración de la medida.

PROCEDIMIENTO GENERAL DE EXPULSIÓN Y CANCELACIÓN DE MATRÍCULA

Habiendo cumplido los requisitos antes descritos, según corresponda, el director puede tomar la decisión de expulsar y cancelar la matrícula del alumno infractor. La decisión y sus fundamentos deben ser informada por escrito al estudiante y a sus padres o apoderados, quienes pueden solicitar la reconsideración dentro de un plazo de 15 días, ante el mismo director. Esta reconsideración la adoptará previa consulta al Consejo de Profesores, el que se debe pronunciar por escrito teniendo a la vista los informes técnicos psicosociales que correspondan.

ANÁLISIS DE LA CONVENIENCIA DEL TEXTO APROBADO EN COMPARACIÓN AL PROPUESTO POR EL EJECUTIVO²

a) Obligatoriedad y duración del procedimiento

El procedimiento general de expulsión no ha permitido a los directores actuar con la debida presteza, ni tampoco se ha presentado como medida disuasiva para la comisión de conductas extremadamente violentas, que escapan de un problema habitual de convivencia escolar. Si bien con la legislación actual ya era posible adoptar las medidas de expulsión y cancelación de matrícula por dichas conductas³, éstas debían cumplir con los requisitos copulativos de estar descritas en el reglamento interno y afectar gravemente la convivencia escolar.

En este sentido, el procedimiento excepcional que proponía el Ejecutivo se presentaba como una reacción eficaz ante los hechos de violencia que describía y un plazo razonable para la suspensión del alumno como medida cautelar, evitando la convivencia de las víctimas con los alumnos infractores. Junto con ello, la aplicación del procedimiento abreviado era obligatorio para el director ante la comisión de dichas conductas. El proyecto aprobado por el Senado, en cambio, requiere que se decrete la medida cautelar

2 Se toma la propuesta de la indicación sustitutiva de proyecto de ley presentada por el Ejecutivo de fecha 22 de octubre de 2018.

3 A este respecto no corresponde a este proyecto de ley la calificación de la bondad de las medidas de expulsión y cancelación de matrícula, medidas ya existentes en la legislación escolar, destinadas a los casos considerados por la comunidad escolar como especialmente graves.

Cuadro comparativo entre los procedimientos de expulsión o cancelación de matrícula general, excepcional propuesto por el Ejecutivo⁴ y en los casos de suspensión, aprobado por el Senado

	Procedimiento General	Procedimiento propuesto por el Ejecutivo	Procedimiento aprobado en el Senado
Establecimientos educativos a los que aplica	Públicos y particulares subvencionados.	Públicos y particulares subvencionados.	Públicos, particulares subvencionados y particulares.
Procedencia	Se aplica para sancionar con expulsión o cancelación de matrícula a los estudiantes que hayan realizado una conducta que afecte gravemente la convivencia escolar y esté descrita en el reglamento interno del establecimiento.	Se aplica para sancionar con expulsión o cancelación de matrícula los casos en que el alumno cometiere alguna de las causales graves descritas taxativamente por la ley ³ .	Se aplica en aquellos casos en que el director impusiere la medida cautelar de suspensión ⁴ , pudiendo derivar en una sanción de expulsión, cancelación de matrícula u otra.
Procedimiento	Debe estar establecido en el reglamento interno del establecimiento, garantizando el derecho del estudiante afectado a realizar sus descargos y a solicitar la reconsideración de la medida.	El procedimiento está establecido en la ley.	El procedimiento está establecido parcialmente en la ley.

4 Se toma la propuesta de la indicación sustitutiva de proyecto de ley presentada por el Ejecutivo de fecha 22 de octubre de 2018

5 Las conductas que eran descritas por el proyecto de ley presentado por el Ejecutivo eran las siguientes:

- 1) Uso, posesión, tenencia y almacenaje, en el establecimiento o sus inmediaciones de material de uso bélico, armas de fuego, municiones y cartuchos, explosivos u otros artefactos similares, sustancias químicas esencialmente susceptibles de ser usadas para fabricar explosivos, elaborar municiones, proyectiles, misiles, cohetes, bombas, cartuchos y elementos lacrimógenos o de efecto fisiológico, armas de pulsaciones eléctricas (bastones eléctricos, electroshock o similares), artefactos incendiarios, explosivos, tóxicos, corrosivos o infecciosos cuyos componentes principales sean pequeñas cantidades de combustibles u otros elementos químicos de libre venta al público y de bajo poder expansivo, tales como las bombas molotov y otros artefactos similares.
- 2) Agresiones físicas que produzcan lesiones a docentes, asistentes de la educación y manipuladoras de alimentos.

6 Las conductas que permiten aplicar la medida cautelar están descritas en el acápite "Contenido del Proyecto de Ley".

	Procedimiento General	Procedimiento propuesto por el Ejecutivo	Procedimiento aprobado en el Senado
Notificación del inicio del procedimiento.	No se contempla.	Conocidos los hechos por el director, inmediatamente deberá informar por escrito del inicio del procedimiento al estudiante y a sus padres o apoderados.	La primera notificación es la de la aplicación de la medida cautelar de suspensión. El director deberá notificar por escrito de la decisión y de sus fundamentos al estudiante, padres o apoderados.
Prohibición de ingreso al establecimiento.	No se contempla a nivel legal ⁷ .	El director deberá establecer la prohibición de ingresar al establecimiento al estudiante que cometiere alguna de las conductas descritas por la ley, como medida provisional y cautelar, mientras se sustancie el procedimiento de expulsión y cancelación de matrícula.	En los casos en que el alumno hubiere cometido una conducta considerada como infracción grave o gravísima por el reglamento interno, que tenga en éste aparejada la sanción de expulsión o cancelación de matrícula, o hubiere cometido alguna de las conductas consideradas por la ley como infracciones graves a la convivencia escolar, estará facultada para aplicar la suspensión al alumno como medida cautelar.
Formulación de descargos y aporte de prueba.	El reglamento interno tiene que garantizar el derecho a formular descargos al estudiante y a sus padres o apoderados. No se contempla un plazo legal.	Se establece un plazo máximo de 4 días para que el estudiante y sus padres o apoderados formulen descargos y aporten prueba.	Se establece un plazo máximo de 10 días hábiles contados desde la notificación de la medida cautelar para resolver el procedimiento sancionatorio. El procedimiento debe respetar los principios del debido proceso, tales como la bilateralidad de la audiencia y el derecho a presentar pruebas.
Fundamentación de la resolución sancionatoria	La resolución debe contener los fundamentos que la motivan.	La resolución adoptada por el director deberá ser fundada.	No se contempla expresamente.

7 La prohibición de ingresar al establecimiento para los casos generales se considera como una medida en sí misma: la suspensión de clases, la cual es una medida extrema y de carácter excepcional, que se puede extender hasta por un plazo máximo de 5 días hábiles, renovables por igual periodo en casos debidamente fundamentados. Es posible la aplicación de la suspensión indefinidamente sólo excepcionalmente, si existe un peligro real para la integridad física o psicológica de algún miembro de la comunidad educativa, lo que deberá ser debidamente acreditado. Sin embargo, fallos de la Corte Suprema y de la Corte de Apelaciones resolviendo recursos de protección, han señalado que no se debe aplicar la medida de suspensión y luego la de expulsión por tratarse ambas de medidas sancionatorias y que no se debe sancionar dos veces por la misma conducta. Disponible en http://denuncias.supereduc.cl/cuestionario1/denuncias_tematicos.html y <https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/educacion/colegios/cubillos-hoy-los-directores-de-colegio-no-pueden-suspender-y-luego/2018-10-10/194519.html>

	Procedimiento General	Procedimiento propuesto por el Ejecutivo	Procedimiento aprobado en el Senado
Notificación de la decisión	La decisión debe informarse por escrito al estudiante y a sus padres y apoderados, junto con sus fundamentos.	La decisión debe informarse por escrito al estudiante y a sus padres y apoderados, junto con sus fundamentos.	No se contempla expresamente.
Solicitud de reconsideración	Puede solicitarse por el estudiante, sus padres o apoderado, dentro de 15 días desde la notificación de la decisión.	Puede solicitarse por el estudiante, sus padres o apoderado, dentro de 2 días desde la notificación de la resolución.	Puede solicitarse por el estudiante, sus padres o apoderado, dentro de 5 días desde la notificación de la resolución.
Decisión de la reconsideración	La toma el director, previa consulta al Consejo de Profesores, el que se pronunciará por escrito teniendo a la vista los informes técnicos psicosociales pertinentes.	La toma el director, previa consulta al Consejo de Profesores, el que deberá pronunciarse por escrito dentro de los 2 días siguientes. Si no se pronuncia dentro de plazo, el director deberá dictar la resolución sin más trámite.	La toma el director, previa consulta al Consejo de Profesores, el que deberá pronunciarse por escrito.
Información a la Dirección Regional de la Superintendencia de Educación de la medida aplicada.	El director debe informar la adopción de la medida dentro de 5 días hábiles, para revisar el cumplimiento del procedimiento descrito.	El director debe informar dentro del plazo de 5 días hábiles o una vez resuelta la reconsideración, según corresponda, a fin de que revise, en la forma, el cumplimiento del procedimiento, así como el respeto a las garantías del debido proceso.	Se mantienen las normas generales.
Reubicación del estudiante y medidas de apoyo.	El Ministerio de Educación debe velar por la reubicación del estudiante afectado y adoptar las medidas de apoyo necesarias.	El Ministerio de Educación, a través del Secretaría Regional Ministerial respectiva, debe velar por la reubicación del estudiante afectado en establecimientos que preferentemente cuenten con profesionales que presten apoyo psicosocial y adoptar las medidas de apoyo necesarias.	El Ministerio de Educación, a través de la Secretaría Regional Ministerial respectiva, velará por la reubicación del estudiante sancionado, en establecimientos que cuenten con profesionales que presten apoyo psicosocial, y adoptará las medidas para su adecuada inserción en la comunidad escolar. Además, informará de cada procedimiento sancionatorio que derive en una expulsión, a la Defensoría de los Derechos de la Niñez, cuando se trate de menores de edad.

como condición sine qua non para la aplicación del procedimiento abreviado, siendo esta medida facultativa para el director. Es decir, aun cometándose las conductas consideradas faltas graves a la convivencia escolar, como agresiones sexuales o porte de armas, el director puede o no suspender al alumno, y de este modo, se puede o no utilizar el procedimiento excepcional.

Además, si bien el procedimiento considerado por el proyecto aprobado es más corto que el general, no lo es lo suficiente, toda vez que durando éste en promedio 25 días, de los cuales 15 se utilizan para la reconsideración de la medida y, en consecuencia, 10 para la adopción de la decisión. Lo único que se disminuye es el plazo de la reconsideración (a 5 días), dejando inalterado el plazo para tomar la decisión de expulsión u otra que estime conveniente. De este modo, reduciéndose a 15 días el procedimiento, pareciera ser todavía muy extenso frente a los 7 que contemplaba la propuesta del Ejecutivo, desde el punto de vista del alumno acusado, el cual si resulta ser inocente estará separado de su comunidad escolar durante tres semanas, y si resulta ser culpable, se activará más lentamente su reubicación en una nueva comunidad escolar y, junto con ello, el apoyo psicopedagógico que necesita.

b) **Conductas sancionadas**

El proyecto de ley del Ejecutivo elevaba el estándar exigido para aplicar el procedimiento excepcional describiendo las conductas a nivel legal. Estas decían relación al uso, posesión, tenencias y almacenaje de distintos tipos armas, entre ellas bombas molotov, y agresiones físicas que produjeran lesiones a docentes, asistentes de la educación y manipuladoras de alimentos, las cuales conducían a la sanción de expulsión

y cancelación de matrícula. Las conductas que ahora quedan señaladas en la ley son a modo ilustrativo y no conducen necesariamente a la expulsión, sino que pueden ser aplicadas otras sanciones. Se refiere a aquellos casos en los cuales se cause daño a la integridad física o síquica de cualquiera de los miembros de la comunidad escolar o de terceros que se encuentren en las dependencias de los establecimientos. Se mencionan las agresiones de carácter sexual (las cuales no se contemplaban con anterioridad, pero, por su gravedad, se considera adecuada su inclusión), agresiones físicas que produzcan lesiones (no sólo a los docentes, sino también a los demás miembros de la comunidad escolar, lo que también es adecuado, para evitar manifestaciones de violencia inaceptables al interior del establecimiento), uso, porte, posesión y tenencia de armas o artefactos incendiarios (se replica lo establecido por el proyecto, pero de forma más amplia, lo que es pertinente para no dejar fuera casos en los cuales el arma no esté descrita por la ley), así como también los actos que atenten contra la infraestructura esencial para la prestación del servicio educativo por parte del establecimiento.

Ahora bien, respecto al autor de las conductas que deben ser sancionadas, en el proyecto original sólo se extendía a los estudiantes. Ahora pueden ser cometidas por cualquier miembro de la comunidad escolar, dentro de la cual se encuentra los padres y apoderados del alumno. ¿Se puede iniciar un procedimiento sancionatorio a los padres? ¿Se sancionará a los hijos con la medida de expulsión o cancelación de matrícula por los hechos de sus progenitores o apoderados? Sería conveniente modificar la redacción del proyecto de ley aprobado, toda vez que no existen procedimientos destinados a sancionar a padres y apoderados que siendo miembros de la comunidad educativa, no se encuentran bajo la potestad de los directores.

c) Medida de suspensión

Es adecuado que se establezca a nivel legal la suspensión del alumno como medida cautelar, entendiendo ésta como separación temporal de las actividades pedagógicas durante la jornada educativa, a fin de resguardar la seguridad de la comunidad escolar.

La indicación sustitutiva del proyecto de ley presentada por el Ejecutivo consideraba esta medida obligatoria para aquellos casos en que la conducta realizada por el alumno se ajustara a las establecidas taxativamente por la ley. En el texto aprobado por el Senado, en cambio, se trata de una medida facultativa para el director y se amplían los casos en los cuales podrá aplicarla a todos aquellos considerados como faltas graves o gravísimas descritas por el reglamento interno del establecimiento que lleve aparejada la expulsión o cancelación de matrícula como sanción o en los que se cause un daño a la integridad física o síquica de cualquiera de los miembros de la comunidad educativa o de terceros que se encuentren en las dependencias de los establecimientos.

En la legislación actual la medida de suspensión es aplicable en casos excepcionales si existe un peligro real para la integridad física o psicológica de algún miembro de la comunidad educativa, por un periodo máximo de 5 días prorrogable por una vez por causa justificada⁸. Sin embargo, ha surgido la disyuntiva si esta medida se puede adoptar como medida cautelar o más bien se trata de una sanción en sí misma. En el primer caso, sería posible aplicar la suspensión en el procedimiento general para evitar la interacción del alumno con la comunidad agredida, aunque

sólo por un máximo de 10 días, no siendo este plazo suficiente para la total tramitación de la aplicación de la sanción (que en promedio tarda 25 días hábiles). En el segundo, en cambio, si se aplicara antes de la expulsión, transgrediría el principio general del derecho “non bis in ídem”, como ha sido considerado por los máximos tribunales de justicia de nuestro país. Por ello, es importante que se faculte a nivel legal la separación del alumno de la comunidad educativa como medida cautelar.

Respecto a si la medida debe ser facultativa u obligatoria para el director, se justificaba su obligatoriedad por las causales acotadas establecidas en forma expresa por la ley, las cuales eran de suma gravedad. Siendo facultativa y más amplias las causales ante las cuales debía aplicarse, estando descritas en forma genérica por la ley o descritas en el reglamento interno, es adecuado que el director deba aplicar su criterio, puesto que en todos los casos aplicables no se presenta la misma necesidad de separar al alumno acusado de las víctimas o del resto de la comunidad escolar. Por ejemplo, en el caso de una agresión física se esperaría que el criterio del director fuera suspender temporalmente al alumno para resguardar a la víctima, pero no cuando el alumno hubiere falsificado la firma de su apoderado, si esta se considerare como infracción grave posible de ser sancionada con expulsión por el reglamento interno del establecimiento. Así, por las diferencias de las conductas que pueden conllevar la aplicación de la medida cautelar es adecuado también que se fundamente la decisión por el director, evitando arbitrariedades. Sin perjuicio de lo anterior, dada la gravedad de las conductas señaladas por el proyecto de ley como ejemplos de actos que causan daño a la integridad física o síquica los miembros de la comunidad o de terceros que se encuentren en las dependencias de los establecimientos-agresiones de carácter sexual; agresiones físicas

8 Circular N° 482 de la Superintendencia de Educación, que imparte instrucciones sobre reglamentos internos de los establecimientos educacionales de enseñanza básica y media con reconocimiento del Estado, de fecha 20 de junio de 2018.

que produzcan lesiones; uso, porte, posesión y tenencia de armas o artefactos incendiarios; y actos que atenten contra la infraestructura esencial para la prestación del servicio educativo por parte del establecimiento-, sería más conveniente que al menos en estos casos se estableciera la obligatoriedad para el director de aplicar la medida cautelar de suspensión, como se establecía por el proyecto original, gatillando con ello la aplicación del procedimiento sancionatorio abreviado. Esto debido a que en aquellas situaciones salta a la vista la necesidad de proteger a la víctima o a la comunidad escolar y se evitaría que ante los mismos hechos el director aplicara la suspensión respecto a un alumno y no de otro.

d) Obligación de iniciar el procedimiento

En ambos proyectos se establece la obligación de iniciar un procedimiento. En la propuesta del Ejecutivo si se cometen las conductas descritas por la ley, el director debe suspender temporalmente al alumno y procederá a la expulsión y cancelación de la matrícula mediante el procedimiento abreviado. En el proyecto iniciado por Senado se establece que si se realiza un conducta que sea una grave infracción a la convivencia escolar según la ley o grave o gravísima según el reglamento interno, que se sancione según éste por expulsión o cancelación de matrícula, el director debe iniciar un procedimiento sancionatorio, el que no es necesariamente de expulsión y puede ser el abreviado o general si aplica o no la medida cautelar de suspensión.

Es adecuado que habiéndose cometido las conductas descritas, se mandate al director a iniciar inmediatamente el procedimiento sancionatorio, toda vez que dichas conductas constituyen hechos considerados por la ley o por la comunidad escolar como especialmente graves, atentatorios al respeto debido a los docentes, funcionarios del establecimiento y demás

miembros de la comunidad escolar, y, que pueden constituir conductas consideradas como delitos en el ordenamiento penal. A este respecto, sólo procederá la responsabilidad penal en la medida que los alumnos sean imputables legalmente y cumplan con los requisitos establecidos por la Ley N°20.084. Sin embargo, se configure o no la responsabilidad penal, ello no obsta a la necesidad de sanción a nivel educacional.

e) Respeto a los derechos de los alumnos sancionados y al debido proceso

Sin perjuicio de la gravedad de los hechos que puedan cometer los alumnos, es necesario que no se pasan a llevar los derechos de los estudiantes acusados. Para ello, es necesario que se establezca un procedimiento que respete el debido proceso, pero también, que el tiempo en que el alumno se encuentre sin la posibilidad de asistir a un establecimiento educacional sea el menor posible.

La garantía del debido proceso se encuentra consagrada en la Constitución Política de la República, en el artículo 19 número 3 inciso sexto: "Toda sentencia de un órgano que ejerza jurisdicción debe fundarse en un proceso previo legalmente tramitado. Corresponderá al legislador establecer siempre las garantías de un procedimiento y una investigación racionales y justos".

De acuerdo a la historia fidedigna de la ley, en la Comisión de Estudio de la Nueva Constitución, el legislador no quiso señalar explícitamente los elementos conformantes del debido proceso. Más bien, quiso imponer solamente los criterios de racionalidad (que sea carente de arbitrariedad) y justicia (cautelando los derechos fundamentales de las partes), debido a que el contenido de los elementos que se entienden conformantes

del debido proceso depende estrechamente de la naturaleza del procedimiento y del asunto de que se trata. Sin embargo, en términos generales, para que exista un debido proceso entendieron que deben configurarse al menos los siguientes elementos: (1) noticia al demandado del procedimiento que lo afecta (notificación), (2) plazo razonable para comparecer y exponer sus derechos -pudiendo procederse en su rebeldía si no comparece una vez notificado-, (3) poder presentar prueba y que esta sea recibida, (4) fundamentación de lo resuelto, (5) derecho a los recursos legales después de la decisión⁹.

Estas garantías del debido proceso no sólo se refieren a las sentencias dictadas por los tribunales de justicia, sino más bien a todo tipo de procesos, ya sean administrativos, sumarios o de cualquier otra clase. La facultad de los directores para sancionar a sus alumnos se ha equiparado, en el estudio del debido proceso durante la tramitación del proyecto¹⁰ por los profesores invitados, a la potestad punitiva sancionatoria, que se refiere al poder con que actúan los órganos estatales no jurisdiccionales investidos de atribuciones para sancionar ilícitos. Si bien se podría llegar a entender así respecto a los directores de establecimientos públicos, no es posible respecto a los directores de los colegios particulares subvencionados a los cuales también se les aplica esta normativa, puesto que éstos no son parte del Estado. Sin embargo, las garantías del debido proceso son aplicables a todo órgano, llámese como se llame, que tenga facultad para dictar una resolución que afecte a la situación

de una persona¹¹. De este modo, aun cuando se trate de potestades que no suponen el ejercicio de jurisdicción, deben sujetarse a los parámetros propios del debido proceso.

Los elementos constitutivos del debido proceso admiten gradaciones y excepciones, según sea la naturaleza de la acción ejercida. Por ejemplo, la bilateralidad de la audiencia aparece postergada en las acciones propiamente cautelares ya que “las excepciones se justifican por la urgente necesidad de adoptar ciertas providencias cuya dilación acarrearía grave perjuicio”. Así también, pueden fijarse distintas formas de notificación e incluso prescindir de ella en algunos casos. Incluso se ha sostenido en la jurisprudencia que resolver en única instancia o sin forma de juicio no implica necesariamente por sí mismo una infracción al debido proceso cuando se ha contemplado una etapa administrativa previa en que es escuchada la parte y luego se abra una instancia jurisdiccional en donde exista la posibilidad de aportar pruebas. Las gradaciones y excepciones, sin embargo, se deben compensar con la racionalidad que debe tener el procedimiento, es decir, que éste no sea arbitrario.

La racionalidad del proceso en cuestión se cumple en la medida que las conductas que lo desencadenan sean lo suficientemente graves para ameritar reducir los tiempos de tramitación y permitir separar al alumno de la comunidad escolar. La justicia, por su parte, se cumple al respetar los derechos fundamentales del alumno sancionado, esto es, el debido proceso y el derecho a la educación.

9 Navarro, Enrique. “La Constitución Económica Chilena ante los Tribunales de Justicia”. Ediciones Universidad FinisTerra, Chile, 2016. Página 220 a 249.

10 La Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado analizó el cumplimiento del debido proceso en forma previa del conocimiento del proyecto de ley por la Comisión de Educación.

11 Arancibia, Mattar y otros. “Actas del Consejo de Estado en Chile” Tomo I, 2008. Página 332, citado en Navarro, Enrique. “La Constitución Económica Chilena ante los Tribunales de Justicia”. Ediciones Universidad FinisTerra, Chile, 2016. Página 233 y 261.

DEBIDO PROCESO EN LOS ÁMBITOS EDUCATIVOS

De acuerdo a la exposición del profesor Sebastián Soto en la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado, los estándares constitucionales del debido proceso que se ha exigido jurisprudencialmente en los ámbitos educativos son los siguientes¹²:

1. Tipicidad: la sanción debe encontrarse sustantivamente descrita en una norma de rango legal. En el caso de los procedimientos educacionales se exige que se encuentre descrita en el reglamento interno¹³. El proyecto de ley del Ejecutivo describía las conductas a nivel legal, elevando el estándar exigido a los procedimientos educacionales, por lo que no presentaba reparos de constitucionalidad. El proyecto de ley aprobado por el Senado, describe las conductas genéricamente en la ley y menciona algunas a modo ilustrativo, lo que hace discutible su respeto al principio de tipicidad, y delega otras a su descripción en

el reglamento interno, lo que se ha respetado por los tribunales en el marco educacional.

2. Emplazamiento previo: poner en conocimiento del acusado que se dirige una investigación en su contra. El proyecto de ley del Ejecutivo contemplaba no sólo la notificación al estudiante, sino también a sus padres o apoderados, por lo que cumplía en lo sustancial el requisito. El proyecto de ley aprobado contempla la notificación por escrito y fundamentada de la resolución que decreta la medida cautelar de suspensión. No se refiere expresamente a la resolución de la sanción final.

3. Derecho a defenderse y presentar descargos: espacio para presentar los descargos y presentar pruebas. El proyecto del Ejecutivo contemplaba un periodo de 4 días para que el estudiante o sus padres o apoderados presentaren sus descargos, por lo que se cumplía el requisito en lo sustancial. El proyecto aprobado contempla un periodo de 10 días en los cuales se deben respetar las normas del debido proceso, tales como la bilateralidad de la audiencia y el derecho a presentar pruebas.

4. Derecho a que la decisión sea revisada: recurrir a un órgano superior que revise lo efectuado. El proyecto del Ejecutivo contemplaba tres instancias de control: interna, al poder solicitarse la reconsideración, decisión en la que participa el Consejo de Profesores (dentro de 2 días); administrativa, revisión del debido proceso por la Superintendencia de Educación; y, judicial, se puede recurrir a la justicia ordinaria mediante el recurso de protección. El proyecto aprobado, contempla las mismas instancias, pero la administrativa tiene una duración de 5 días.

12 Coinciden también con lo establecido por la Circular N°482, según la cual se entiende por procedimiento justo y racional que debe ser establecido por el reglamento interno, aquel establecido en forma previa a la aplicación de una medida, que considere al menos la comunicación al estudiante de la falta establecida en el Reglamento Interno por la cual se pretende sancionar; respete la presunción de inocencia, garantice el derecho a ser escuchado (descargos) y de entregar los antecedentes para su defensa, se resuelva de manera fundada y en un plazo razonable, y garantice el derecho a solicitar la revisión de la medida antes de su aplicación.

13 Un estudio del centro de estudios Observatorio Judicial en el que analiza 112 sentencias de la tercera sala de la Corte Suprema que revisan cancelaciones de matrícula escolar (Informe N° 4. 06 de octubre de 2017) sostiene: "La jurisprudencia ha fijado que existe 'justo procedimiento' cuando el reglamento de convivencia establece un mecanismo que informe al alumno las conductas que se le imputan, la oportunidad de formular descargos para desvirtuar la acusación y la posibilidad de solicitar la revisión de la sanción aplicada" Citado por el profesor Sebastián Soto en su exposición y disponible en <http://www.observatoriojudicial.org/la-corte-suprema-y-la-cancelacion-de-matricula-escolar/>

Asimismo, el proyecto cumple con el requisito exigido a los actos administrativos sancionatorios:

5. Motivación de la sentencia: todo acto emanado de un órgano del Estado debe ser fundado, en virtud de lo dispuesto en el artículo 8° de la Constitución. Es muy importante para justificar la racionalidad de la decisión y para proporcionar al tribunal superior criterios útiles para el juicio de revisión. El proyecto del Ejecutivo exigía que la resolución emanada del director fuera por escrito y fundamentada. El nuevo proyecto sólo lo contempla respecto a la notificación de la suspensión como medida cautelar.

DERECHO A

LA EDUCACIÓN

Aun cuando pueda considerarse que el derecho a la educación del alumno se puede ver limitado

al ser separado del establecimiento por la acusación de la comisión de un hecho, esta limitación cumple con la exigencia de racionalidad que exige la Constitución. En efecto, esta se impone por hechos considerados a nivel legal o por reglamento interno lo suficientemente graves que ameritan la suspensión de su derecho a asistencia. Incluso, la decisión en el proyecto de ley aprobado debe ser fundamentada, lo que permite su revisión.

Sin embargo, la aplicación de esta medida por un periodo extenso no es adecuada para la reinserción escolar del estudiante, por lo que la rapidez del proceso resguarda su derecho a poder acceder a la educación formal. Si es considerado inocente se podrá reincorporar a su comunidad escolar y, en cambio, si es considerado culpable, activará la función del Ministerio de Educación de reubicarlo en una nueva comunidad educativa, la cual deberá contar preferentemente con profesionales que presten apoyo psicosocial, con las medidas de apoyo necesarias ■■■

TEXTO DEL **PROYECTO DE LEY** **APROBADO POR EL SENADO**

“Artículo 1°.- Introdúcense las siguientes modificaciones en la letra d) del artículo 6°¹⁴ del decreto con fuerza de ley N° 2, del Ministerio de Educación, de 1998, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del decreto con fuerza de ley N° 2, de 1996, sobre subvención del Estado a establecimientos educacionales:

1. En el párrafo quinto, sustitúyese la expresión “y, además,” por la voz “o”; e intercálase, a continuación de la expresión “la convivencia escolar”, lo siguiente: “, conforme a lo dispuesto en esta ley”.
2. Incorpórase, a continuación del párrafo quinto, el siguiente párrafo sexto, nuevo:

“Siempre se entenderá que afectan gravemente la convivencia escolar los actos cometidos por cualquier miembro de la comunidad educativa, tales como profesores, padres y apoderados, alumnos, asistentes de la educación, entre otros, de un establecimiento educacional, que causen daño a la integridad física o síquica de cualquiera de los miembros de la comunidad educativa o de terceros que se encuentren en las dependencias de los establecimientos, tales como agresiones de carácter sexual, agresiones físicas que produzcan lesiones, uso, porte, posesión y tenencia de armas o artefactos incendiarios, así como también los actos que atenten contra la infraestructura esencial para la prestación del servicio educativo por parte del establecimiento.”.

3. Incorpóranse a continuación del párrafo undécimo, que pasa a ser párrafo duodécimo, los siguientes párrafos decimotercero, decimocuarto, decimoquinto y decimosexto, nuevos:

“El director deberá iniciar un procedimiento sancionatorio en los casos en que algún miembro de la comunidad educativa incurriera en alguna conducta grave o gravísima establecida como tal en los reglamentos internos de cada establecimiento, o que afecte gravemente la convivencia escolar, conforme a lo dispuesto en esta ley.

El director tendrá la facultad de suspender, como medida cautelar y mientras dure el procedimiento sancionatorio, a los alumnos y miembros de la comunidad escolar que en un establecimiento educacional hubieren incurrido en alguna de las faltas graves o gravísimas establecidas como tales en los reglamentos internos de cada establecimiento, y que conlleven como sanción en los

14 La letra d) del artículo 6°, modificada por el proyecto de ley, dada su extensión, se incluye en un **ANEXO**.

mismos, la expulsión o cancelación de la matrícula, o afecten gravemente la convivencia escolar, conforme a lo dispuesto en esta ley.

El director deberá notificar la decisión de suspender al alumno, junto a sus fundamentos, por escrito al estudiante afectado y a su madre, padre o apoderado, según corresponda. En los procedimientos sancionatorios en los que se haya utilizado la medida cautelar de suspensión, habrá un plazo máximo de diez días hábiles para resolver, desde la respectiva notificación de la medida cautelar. En dichos procedimientos se deberán respetar los principios del debido proceso, tales como la presunción de inocencia, bilateralidad, derecho a presentar pruebas, entre otros.

Contra la resolución que imponga el procedimiento establecido en los párrafos anteriores se podrá pedir la reconsideración de la medida dentro del plazo de cinco días contado desde la respectiva notificación, ante la misma autoridad, quien resolverá previa consulta al Consejo de Profesores, el que deberá pronunciarse por escrito. La interposición de la referida reconsideración ampliará el plazo de suspensión del alumno hasta culminar su tramitación. La imposición de la medida cautelar de suspensión no podrá ser considerada como sanción cuando resuelto el procedimiento se imponga una sanción más gravosa a la misma, como son la expulsión o la cancelación de la matrícula.”.

4. Incorpórase a continuación del párrafo duodécimo, que pasa a ser párrafo decimoséptimo, el siguiente párrafo decimoctavo, nuevo:

“El Ministerio de Educación, a través de la Secretaría Regional Ministerial respectiva, velará por la reubicación del estudiante sancionado, en establecimientos que cuenten con profesionales que presten apoyo psicosocial, y adoptará las medidas para su adecuada inserción en la comunidad escolar. Además, informará de cada procedimiento sancionatorio que derive en una expulsión, a la Defensoría de los Derechos de la Niñez, cuando se trate de menores de edad.”.

Artículo 2°.- Las causales que afecten gravemente la convivencia escolar previstas en el párrafo sexto, así como el procedimiento establecido en el párrafo decimocuarto, ambos de la letra d) del artículo 6° del decreto con fuerza de ley N° 2, del Ministerio de Educación, de 1998, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del decreto con fuerza de ley N° 2, de 1996, sobre subvención del Estado a establecimientos educacionales, incorporados por la presente ley, serán aplicables a los establecimientos educacionales que impartan educación básica y media, regulados por el decreto con fuerza de ley N° 2, del Ministerio de Educación, promulgado el año 2009 y publicado el año 2010, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 20.370, con las normas no derogadas del decreto con fuerza de ley N° 1, de 2005.

Artículo transitorio.- Los establecimientos educacionales regidos por el decreto con fuerza de ley N° 2, del Ministerio de Educación, de 1998, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del decreto con fuerza de ley N° 2, de 1996, sobre subvención del Estado a establecimientos educacionales, deberán actualizar sus reglamentos internos para adecuarlos a los preceptos de la presente ley en un plazo de noventa días a partir de su publicación.

ANEXO

LETRA d) DEL ARTÍCULO 6°, QUEDARÍA CON LA SIGUIENTE REDACCIÓN:

Artículo 6°. Para que los establecimientos de enseñanza puedan impetrar el beneficio de la subvención, deberán cumplir con los siguientes requisitos:

d) Que cuenten con un reglamento interno que rija las relaciones entre el establecimiento, los alumnos y los padres y apoderados. En dicho reglamento se deberán señalar: las normas de convivencia en el establecimiento, que deberán incluir expresamente la prohibición de toda forma de discriminación arbitraria; las sanciones y reconocimientos que origina su infracción o destacado cumplimiento; los procedimientos por los cuales se determinarán las conductas que las ameritan; y, las instancias de revisión correspondientes.

Los reglamentos internos deberán ser informados y notificados a los padres y apoderados para lo cual se entregará una copia del mismo al momento de la matrícula o de su renovación cuando éste haya sufrido modificaciones, dejándose constancia escrita de ello, mediante la firma del padre o apoderado correspondiente.

Sólo podrán aplicarse las sanciones o medidas disciplinarias contenidas en el reglamento interno, las que, en todo caso, estarán sujetas a los principios de proporcionalidad y de no discriminación arbitraria, y a lo dispuesto en el artículo 11 del decreto con fuerza de ley N°2, de 2009, del Ministerio de Educación.

No podrá decretarse la medida de expulsión o la de cancelación de matrícula de un o una estudiante por motivos académicos, de carácter político, ideológicos o de cualquier otra índole, sin perjuicio de lo dispuesto en los párrafos siguientes.

Las medidas de expulsión y cancelación de matrícula sólo podrán aplicarse cuando sus causales estén claramente descritas en el reglamento interno del establecimiento y, además, o afecten gravemente la convivencia escolar, conforme a lo dispuesto en esta ley.

Siempre se entenderá que afectan gravemente la convivencia escolar los actos cometidos por cualquier miembro de la comunidad educativa, tales como profesores, padres y apoderados, alumnos, asistentes de la educación, entre otros, de un establecimiento educacional, que causen daño a la integridad física o síquica de cualquiera de los miembros de la comunidad educativa o de terceros que se encuentren en las dependencias de los establecimientos, tales como agresiones de carácter sexual, agresiones físicas que produzcan lesiones, uso, porte, posesión y tenencia de armas o artefactos incendiarios, así como también los actos que atenten contra la infraestructura esencial para la prestación del servicio educativo por parte del establecimiento.

Las disposiciones de los reglamentos internos que contravengan normas legales, se tendrán por no escritas y no podrán servir de fundamento para la aplicación de medidas por parte del establecimiento a conductas de los miembros de la comunidad educativa.

Previo al inicio del procedimiento de expulsión o de cancelación de matrícula, el director del establecimiento deberá haber representado a los padres, madres o apoderados, la inconveniencia de las conductas, advirtiendo la posible aplicación de sanciones e implementado a favor de el o la estudiante las medidas de apoyo pedagógico o psicosocial que estén expresamente establecidas en el reglamento interno del establecimiento educacional, las que en todo caso deberán ser pertinentes a la entidad y gravedad de la infracción cometida, resguardando siempre el interés superior del niño o pupilo. No se podrá expulsar o cancelar la matrícula de un estudiante en un período del año escolar que haga imposible que pueda ser matriculado en otro establecimiento educacional.

Lo dispuesto en el párrafo precedente no será aplicable cuando se trate de una conducta que atente directamente contra la integridad física o psicológica de alguno de los miembros de la comunidad escolar, de conformidad al Párrafo 3° del Título I del decreto con fuerza de ley N°2, de 2009, del Ministerio de Educación. En ese caso se procederá con arreglo a los párrafos siguientes.

Las medidas de expulsión o cancelación de matrícula sólo podrán adoptarse mediante un procedimiento previo, racional y justo que deberá estar contemplado en el reglamento interno del establecimiento, garantizando el derecho del estudiante afectado y/o del padre, madre o apoderado a realizar sus descargos y a solicitar la reconsideración de la medida.

La decisión de expulsar o cancelar la matrícula a un estudiante sólo podrá ser adoptada por el director del establecimiento. Esta decisión, junto a sus fundamentos, deberá ser notificada por escrito al estudiante afectado y a su padre, madre o apoderado, según el caso, quienes podrán pedir la reconsideración de la medida dentro de quince días de su notificación, ante la misma autoridad, quien resolverá previa consulta al Consejo de Profesores. El Consejo deberá pronunciarse por escrito, debiendo tener a la vista el o los informes técnicos psicosociales pertinentes y que se encuentren disponibles.

Los sostenedores y/o directores no podrán cancelar la matrícula, expulsar o suspender a sus estudiantes por causales que se deriven de su situación socioeconómica o del rendimiento académico, o vinculadas a la presencia de necesidades educativas especiales de carácter permanente y transitorio definidas en el inciso segundo del artículo 9º, que se presenten durante sus estudios. A su vez, no podrán, ni directa ni indirectamente, ejercer cualquier forma de presión dirigida a los estudiantes que presenten dificultades de aprendizaje, o a sus padres, madres o apoderados, tendientes a que opten por otro establecimiento en razón de dichas dificultades. En caso que el o la estudiante repita de curso, deberá estarse a lo señalado en el inciso sexto del artículo 11 del decreto con fuerza de ley N°2, de 2009, del Ministerio de Educación.

El director deberá iniciar un procedimiento sancionatorio en los casos en que algún miembro de la comunidad educativa incurriere en alguna conducta grave o gravísima establecida como tal en los reglamentos internos de cada establecimiento, o que afecte gravemente la convivencia escolar, conforme a lo dispuesto en esta ley.

El director tendrá la facultad de suspender, como medida cautelar y mientras dure el procedimiento sancionatorio, a los alumnos y miembros de la comunidad escolar que en un establecimiento educacional hubieren incurrido en alguna de las faltas graves o gravísimas establecidas como tales en los reglamentos internos de cada establecimiento, y que conlleven como sanción en los mismos, la expulsión o cancelación de la matrícula, o afecten gravemente la convivencia escolar, conforme a lo dispuesto en esta ley.

El director deberá notificar la decisión de suspender al alumno, junto a sus fundamentos, por escrito al estudiante afectado y a su madre, padre o apoderado, según corresponda. En los procedimientos sancionatorios en los que se haya utilizado la medida cautelar de suspensión, habrá un plazo máximo de diez días hábiles para resolver, desde la respectiva notificación de la medida cautelar. En dichos procedimientos se deberán respetar los principios del debido proceso, tales como la presunción de inocencia, bilateralidad, derecho a presentar pruebas, entre otros.

Contra la resolución que imponga el procedimiento establecido en los párrafos anteriores se podrá pedir la reconsideración de la medida dentro del plazo de cinco días contado desde la respectiva notificación, ante la misma autoridad, quien resolverá previa consulta al Consejo de Profesores, el que deberá pronunciarse por escrito. La interposición de la referida reconsideración ampliará el plazo de suspensión del alumno hasta culminar su tramitación. La imposición de la medida cautelar de suspensión no podrá ser considerada como sanción cuando resuelto el procedimiento se imponga una sanción más gravosa a la misma, como son la expulsión o la cancelación de la matrícula.

El director, una vez que haya aplicado la medida de expulsión o cancelación de matrícula, deberá informar de aquella a la Dirección Regional respectiva de la Superintendencia de Educación, dentro del plazo de cinco días hábiles, a fin de que ésta revise, en la forma, el cumplimiento del procedimiento descrito en los párrafos anteriores. Corresponderá al Ministerio de Educación velar por la reubicación del estudiante afectado por la medida y adoptar las medidas de apoyo necesarias.

El Ministerio de Educación, a través de la Secretaría Regional Ministerial respectiva, velará por la reubicación del estudiante sancionado, en establecimientos que cuenten con profesionales que presten apoyo psicosocial, y adoptará las medidas para su adecuada inserción en la comunidad escolar. Además, informará de cada procedimiento sancionatorio que derive en una expulsión, a la Defensoría de los Derechos de la Niñez, cuando se trate de menores de edad.

La infracción de cualquiera de las disposiciones de este literal, será sancionada como infracción grave.



